

empleo, y es de expedito derecho que todo auto aun interlocutorio que causa gravamen irreparable, es apelable y en su caso suplicable. Considerando ademas, respecto del auto de 9 de Diciembre de 1872 que reprueba el sobreseimiento decretado en 27 de Agosto del mismo año por el Juez de Distrito del Estado de México, y manda que se hagan á Mateos los cargos que ese auto expresa: que lo decretado por el Juez de Distrito de México, se apoya en que las constancias de la averiguacion no dan mérito para seguir procediendo contra D. José M^a Mateos y Reynoso, pues ponen en claro su buen manejo: que los cargos que la 1^a Sala del Tribunal Superior de México en calidad de Tribunal de Circuito dispone en su auto apelado que se hagan á D. José M^a Mateos Reynoso, estan desvanecidos de antemano segun las constancias de la averiguacion formada ante el Juzgado de Distrito del Estado de México; por lo expuesto y de conformidad en lo conducente con lo pedido por el Ministerio público, se decreta:

Primero: que se revoca el auto de 13 de Enero del presente año que declaró insuplicable el de 9 de Diciembre del año próximo pasado, que desaprueba el de sobreseimiento pronunciado por el Juez de Distrito del Estado de México en 25 de Agosto de dicho año próximo pasado. Segundo: que por sus propios legales fundamentos se confirma el auto pronunciado por el Juez de Distrito de México en la fecha referida, 21 de Agosto del año anterior, que mandó sobreseer en la averiguacion formada contra D. José M^a Mateos y Reynoso. Tercero: devuélvase las actuaciones de 1^a y de 2^a instancia á la 1^a Sala del Tribunal Superior del Distrito de México, en calidad de Circuito, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: hágase saber y archívese á su vez el Toca de 3^a instancia.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron la 1^a Sala de la Corte Suprema

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Enero 19 de 1873.—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. José de Jesus Lucero, contra su consignacion al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Está probado en estos autos que el quejoso fué mal consignado al servicio de las armas, pues se hizo sin su consentimiento. Así mismo se ha probado que no ha sido desertor y que jamas ha servido en el ejército.

Razones son estas por las cuales el Promotor que suscribe cree, que en perjuicio del promovente están violadas las garantías que á todo hombre otorga el artículo quinto de la Constitucion, y que debe ampararse en esa virtud, con fundamento del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869.

Reproduciendo lo alegado por el representante de José de Jesus Lucero, este ministerio fiscal pide á vd. acuda á su solicitud por los motivos expuestos.

Zaragoza, Abril 14 de 1873.—*E. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Abril 22 de 1873.—Visto este juicio promovido por el C. José de Jesus Lucero, solicitando amparo contra la disposicion del C. Gefe político de esta ciudad,

que lo destinó al servicio de las armas, con violacion de las garantías individuales consignadas en los artículos 5º, 16, 19 y 20 de la Constitucion general de la República; el informe de la autoridad que asegura no ser José de Jesus Lucero, sino Castro, el que fué puesto á disposicion del C. Comandante del décimo batallon que lo reclamó como desertor; las pruebas rendidas por el quejoso; su alegato de bien probado; con el pedimento fiscal y cuanto mas debió verse y tener presente convino.

Considerando: que por las declaraciones de siete testigos, cuatro de ellos presenciales, aparece plenamente probado que el 29 de Noviembre de 1872, fué aprehendido José de Jesus Lucero por la policia y conducido á la gefatura política de esta ciudad, la que lo consignó al servicio de las armas en el décimo batallon de línea, lo cual destruye el informe del C. Gefe Político que niega ser Lucero el aprehendido y consignado al décimo batallon de línea, sino José de Jesus Castro, y esto por haber sido reclamado como desertor: Que tanto por las declaraciones de los mismos testigos como por la boleta presentada por parte del quejoso, aparece igualmente probado que desde 18 de Diciembre de 1871, fué Lucero esceptuado del servicio de la guardia Nacional, de la que mal podia desertar cuando no servía; que de la copia de la comunicacion del C. Comandante del décimo batallon, remitida por la misma gefatura, aparece que no fué Lucero sino Castro el reclamado como desertor por aquel, y en la filiacion cuya copia remitió el mismo Gefe, igualmente aparece que Lucero fué aprehendido en esta ciudad como desertor; por cuya razon se le destinó á servir cinco años en el Ejército; que no resultando probado sino ántes por el contrario desmentido el motivo de la consignacion de Lucero al servicio de las armas, es indudable que se le quiere obligar á que preste servicios contra su voluntad, violando en su persona la garantía consignada en el art. 5º de la Constitucion general de la Re-

TOMO IV.—PARTE II.

pública, y que por el hecho de consignar á un individuo al servicio de las armas, no se puede decir que se le condene sin los trámites establecidos en los juicios, ni que se le detiene por mas tiempo del permitido por la Constitucion, ni que se le moleste en su persona sin mandato de la autoridad, como supone el quejoso al solicitar amparo, por considerar violadas en su persona las garantías consignadas en los arts. 16, 19 y 20 de la Constitucion.

Por tales consideraciones y con fundamento de lo prevenido por el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: Primero; que la Justicia de la Union ampara y protege al C. José de Jesus Lucero, por haber sido destinado contra su voluntad al servicio de las armas por la Gefatura política de esta ciudad, con violacion de la garantía del art. 5º de la Constitucion, y segundo: que no han sido violadas en su persona como pretende, las garantías de los arts. 16, 19 y 20 de la misma Constitucion. Hágase saber, y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision; y copias de esta sentencia á los periódicos oficiales del Supremo Gobierno y del Estado. El C. Juez primero suplente de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*Vicente Espinosa y Bandini.*

Es copia que certifico para su insercion en el Semanario Judicial de la Federacion. Puebla, Abril 23 de 1873.—*Antonio Garcia Mosqueira*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 19 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por José de Jesus Lucero ante el Juzgado de Distrito de Puebla, contra el Gefe político de esa Ciudad que lo consignó á servir en el 10º batallon de línea aprehendido que fué por la policia hallándose ebrio y encontrándole un

cuchillo, con cuya consignacion cree el quejoso vulnciadas en su persona las garantías á que se refieren los artículos 5º, 16, 19, y 20 de la Constitucion federal; y considerando: que en el expediente aparece, que Lucero fué consignado contra su voluntad al servicio militar por reputársele desertor de la guardia nacional: que así por la declaracion de los testigos presentados por el quejoso, como por la boleta respectiva que obra en el expediente, consta que Lucero no puede ser tenido como desertor de guardia Nacional, porque está exceptuado de servir en ella: que si bien su consignacion á servir en el ejército de linea, no puede decirse un ataque á las garantías á que se refieren los artículos 16, 19 y 20 de la Constitucion federal, no sucede lo mismo respecto de la á que se refiere el art. 5º de la misma Constitucion; por lo expuesto y de conformidad con lo que se previene en el art. 101. se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio en 22 de Abril último por el Juez de Distrito de Puebla en la parte que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. José de Jesus Lucero, por haber sido destinado contra su voluntad al servicio de las armas por la Gefatura Política de esa Ciudad, con violacion del art. 5º de la Constitucion.—Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*J. M. Iglesias, —Pedro Ogazon. —Juan J. de la Garza. —J. M. Lozano. —José Arteaga. —Pedro Ordaz. —Ignacio Ramirez. —M. Castañeda y Nájera. —J. M. del Castillo Velasco. —M. Auza. —Simon Guzman. —Luis Velasquez. —M. Zavala. —Luis M. Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México. Mayo 26 de 73.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por D. José C. Valadéz, contra el C. Gobernador de ese Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El promotor fiscal dice: D. José C. Valadéz, se ha presentado ante V. solicitando amparo contra los procedimientos del C. Prefecto del Distrito, que en virtud de disposiciones administrativas del C. Gobernador del Estado, ha impuesto á dicho Valadéz la pena de un año de prision por infraccion contra la ley orgánica de los artículos 6 y 7 de la Constitucion general. El quejoso funda su recurso en la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. El Sr. Valadéz, hace mérito de que se le ha procesado administrativamente por delito de falsedad, porque se han calificado sus escritos como suversivos y por que se le há impuesto la pena de prision sin dejarle la opcion á escoger la pena pecunaria en lugar de la corporal, en los términos del artículo 42 de la ley de imprenta, violándose así en su persona las garantías que otorga el artículo 16 de la Constitucion federal; y contra lo que dispone el 21, sobre las facultades que para imponer penas, que propiamente no lo son, concede á la autoridad política ó administrativa el referido artículo. Agrégase tambien, que puesto que se le ha formado un verdadero proceso atribuyéndole delitos de falsedad y contra el órden público sin oírle en defensa, se ha violado tambien la garantía que concede el artículo 20 en su fraccion 5ª, pide la previa suspension del acto reclamado.

Ese juzgado dictó desde luego la suspension, porque la creyó procedente, y para sustanciar el recurso pidió á la autoridad ejecutiva el informe que previene la ley. En este informe que rinde el Gobierno y no la Perfectura, se asienta: que con fundamento